



**PARTIDO
COMUNISTA
DE ESPAÑA**

Comité Regional de Aragón

C/ Mayor 55
50.001 - Zaragoza
976 200 256
www.aragon.pce.es
info@aragon.pce.es

INFORME POLÍTICO OCTUBRE 2021

El curso político ha comenzado con un proceso de vacunación muy avanzado que ha permitido la vuelta a gran parte de la normalidad; esto añadido al impulso del sector servicios por el turismo estival ha provocado una tímida recuperación del empleo en Aragón, con 10.000 personas desempleadas menos que hace justo un año.

Pero esta recuperación se sigue sustentando sobre la precariedad, temporalidad y parcialidad de los trabajos, prueba de ello es que en Aragón tan solo el 7% de los contratos firmados en agosto de este año han sido indefinidos. Esta precariedad provoca un aumento de la siniestralidad que se ha incrementado en los 5 primeros meses de este año un 21,12% en los accidentes leves, y un 65% en los accidentes graves, pasando de 36 a 56. La salida laboral de este parón provocado por la pandemia se continúa basando en un modelo altamente flexible en base a esa temporalidad, lo que no garantiza que ante cualquier eventualidad se vuelva a destruir empleo de manera masiva en un espacio breve de tiempo.

La industria que se mantiene está especializada en ensamblar productos importados y muy dependiente de las decisiones y la tecnología foránea, como vemos en PSA-Opel Figueruelas que ha vuelto a detener su producción por la falta de suministro de microchips siendo la conciliación y los derechos laborales los paganos de un modelo productivo dependiente, que por supuesto también afectan a las plantillas de las empresas auxiliares.

La crisis de suministros no afecta solo a los semiconductores, también a otros materiales necesarios y en Aragón ya se cifran en 1000 puestos de trabajo perdidos y en otros 10.000 trabajadores en ERTE. Como el caso de Ronal Ibérica, la mayor empresa de la provincia de Teruel, dedicada a la producción de llantas de aluminio para el sector automovilístico que ha planteado un ERTE a 491 trabajadores de 513 que tiene la plantilla y el cierre de una de las dos plantas que tienen en Teruel ciudad por un periodo mínimo de 6 meses.

Aragón, en comparación con el resto de comunidades, tiene un mayor peso el tejido industrial con respecto a otros sectores económicos, teniendo una gran dependencia de la automoción y la planta de GM-PSA de Figueruelas, por lo que esta crisis de suministro está teniendo un mayor impacto en el empleo.

Por ello la campaña desarrollada recientemente por el PCE Aragón con el título "Defendamos la industria. Trabajo, soberanía y futuro" cobra más sentido que nunca. Es necesario cambiar de modelo, romper con la dependencia económica y recuperar la soberanía productiva, impulsando un modelo que garantice derechos, fije población en el territorio y sea respetuoso con el medioambiente. Algo que solo será posible desde la participación y control público.

Por el contrario el Gobierno de Aragón anuncia que utilizará los fondos europeos para mantener abiertas las estaciones de esquí de Candanchú, evidenciando otro claro ejemplo de socialización de las pérdidas de las empresas privadas mientras las ganancias siguen siendo privadas, invade la Roca de Troc con sus máquinas para la ampliación de Castanesa, saltándose la más mínima legalidad y respeto de la actual propiedad y las habitantes del valle. Y como ejemplo más paradigmático de su modelo económico ha vuelto a sacar del cajón el proyecto de los Juegos Olímpicos de 2030.

Desde el PCE Aragón nos oponemos una vez más al proyecto de los Juegos Olímpicos, que solo supondrán despilfarrar más dinero público en este tipo de actuaciones que demuestra que no son social ni económicamente sostenibles. Pero tampoco ambientalmente. Es una evidencia científica que los Pirineos perderán la mitad del espesor de nieve en los próximos 30 años, por lo que esta candidatura de Juegos Olímpicos solo es un delirio insostenible propio de Lambán, que desoye cualquier informe sobre el efecto del cambio climático.

Finalmente el proyecto de Incineradora de Biomasa de Monzón en Huesca queda descartado al haber perdido las necesarias autorizaciones. Desde el PCE nos felicitamos por ello y reconocemos a la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa por la movilización emprendida sin la que este proyecto hubiera continuado, afectando a la salud de las localidades cercanas a su ubicación y dificultando para la posible implantación de industrias limpias en la población de Monzón.

El Gobierno de Aragón no tiene modelo económico alternativo más allá de continuar con las viejas recetas de poner alfombras rojas como está haciendo con Amazon, multinacional caracterizada por la evasión de impuestos para lo que la DGA ya la declaró Proyecto de Interés General de Aragón y con la que, hace unos días, anunció un acuerdo para impulsar un campus de FP digital y digitalizar las administraciones aragonesas. Algo que supone entregar aún más nuestra soberanía a multinacionales extranjeras.

A la precariedad de un modelo económico dependiente, sin justicia social ni ambiental, se añade la carestía de la vida donde destaca el aumento del precio de la luz, donde el oligopolio eléctrico está provocando un aumento desorbitado para mantener su enriquecimiento, que junto al aumento del combustible sitúan en estos momentos el IPC en el 3.2% en Aragón. Por el contrario el salario medio pactado en convenio durante el primer semestre de este año ha sido de la mitad en Aragón, un 1.6%.

Las desigualdades sociales se acrecientan y la salida represiva para aquellas que tratan de luchar contra ellas; por este motivo la Coordinadora de Vivienda de Aragón ha puesto en marcha una Caja de Resistencia para los gastos sin cubrir del proceso judicial contra tres personas por participar en el desalojo de un hotel abandonado de SAREB, a la que desde el PCE llamamos a colaborar.

La vivienda continua sin ser un derecho real, mientras el PSOE y los lobbys de grandes tenedores bloquean la regulación del precio del alquiler; tampoco las administraciones aragonesas hacen nada por garantizarlo de manera efectiva. Desde el PCE consideramos que la ley aragonesa que se compromete a garantizarlo y el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones aragonesas tienen capacidad para hacerlo efectivo potenciando a nivel local y autonómico una empresa pública que posea un parque público de vivienda asequible en alquiler, no únicamente social.

Desde el Gobierno de Aragón no se invierte lo necesario para paliar estas crecientes

desigualdades sociales lo que hace que las prestaciones sociales no se ajusten a esta realidad. La prestación contra la pobreza energética aragonesa está limitada a 200€ al año en medio de una escala del precio de la luz y en la PACIMV, que un año más tarde de su aprobación no se ha puesto en marcha, se ha presentado un borrador de reglamento mucho más restrictivo que lo aprobado en la ley, lo que limitará claramente el acceso a la población más excluida que es a la que debe ir dirigida.

El inicio del curso escolar ha vuelto a mostrar las deficiencias por la falta de inversión, que han sido gestionadas de manera caciquil por el Departamento que dirige Felipe Faci. A la falta de Auxiliares de Educación Especial, Monitoras de Comedor y Técnicos de Educación Infantil en centros educativos aragoneses se añade la situación del personal laboral y la falta de infraestructuras especialmente en los colegios de la zona sur de Zaragoza, donde de 2500 matrículas de 3 años que ha habido este año, 1000 pertenecen a los barrios del sur de Zaragoza (Valdespartera, Arcosur y Parque Venecia).

La falta de voluntad de inversión en educación del Gobierno de Aragón se manifiesta cuando el programa Proa+ de financiación estatal para la contratación de profesionales para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se está aprovechando por el Gobierno de Aragón para reducir la financiación educativa autonómica como ya hiciera con el IMV y el IAI.

La escuela pública no es una prioridad para el Gobierno de Aragón cuando la reducción de 25 aulas que ha habido este año todas son en la pública y ninguna en la concertada, pero tampoco para el ayuntamiento de Zaragoza que concede subvenciones a la escuela concertada que vulneran el derecho fundamental a la igualdad y supone una discriminación infundada, máxime cuando el 67% del alumnado vulnerable de la ciudad se encuentra escolarizado en centros públicos.

La falta de inversión en servicios públicos esenciales se ha sufrido este verano en la sanidad de las zonas rurales, especialmente en la atención primaria. La falta de personal supone saturar y cargar de trabajo a los que siguen en centro de salud y por ende un servicio de peor calidad. Existe en el mundo rural una carencia general de personal por vacaciones no cubiertas, vacaciones no disfrutadas por esa imposibilidad de ser cubierta. El Gobierno de Aragón opta por una menor actividad presencial en la atención primaria sustituyéndola por la telemedicina que fomenta la inequidad y tiene consecuencias nefastas para la población más pobre, de más edad y la más necesitada de atención.

Mientras ocurre esto, el pasado jueves profesionales sanitarios, sindicatos y plataformas en defensa de la sanidad pública se concentraron en las puertas del hospital Clínico de Zaragoza contra la no renovación de cientos de contratos por parte del Salud, que supondrán el despido de entre 800 y 1200 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública aragonesa.

La falta de inversión provoca estos recortes, mientras algunos de los fondos europeos van al Banco de Sangre, entidad pública aragonesa gestionada por un patronato en el que la Iglesia Católica tiene bastante control. Con la concentración de este miércoles nos encontramos ante un reinicio modesto de las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública en Aragón, por ello desde el Partido, como no puede ser de otra manera, apoyamos y apoyaremos las movilizaciones que salgan tanto desde la Mesa Aragonesa por la Sanidad (M.A.S.) como desde otras organizaciones.

El pasado 28 de septiembre se celebró el "Día de acción global por el acceso al aborto

legal y seguro” en el que volvimos a denunciar que ante la objeción de conciencia colectiva por los centros sanitarios aragoneses, nuestro sistema sanitario ha optado por la concertación, sacándolo completamente de las intervenciones que se llevan a cabo en el sistema público de salud en Aragón.

Un centro concertado en Aragón al que se tienen que desplazar todas las mujeres que hayan decidido hacer una interrupción voluntaria del embarazo, y que provoca que por ejemplo en Teruel, junto a otras 7 provincias españolas, nunca se haya practicado abortos en 30 años. Una media que además favorece la acción de los lobbys contra el derecho a decidir que acosan a las mujeres en las puertas de los centros, presionándolas para cumplir un mandato de género que no tiene en cuenta su contexto ni su realidad, dando información falsa y desde una concepción paternalista y patriarcal que infunde a la mujer la obligación de la procreación para sostener un sistema que la utiliza y la explota para ello. Desde el PCE reclamamos un derecho al aborto efectivo, en la sanidad pública para todas las aragonesas, en libertad, con seguridad y gratuidad.

El mundo rural aragonés también está sufriendo un recorte en los servicios de atención ciudadana en las oficinas bancarias, algo aún más grave tratándose de personas mayores que sufren brecha digital y necesitan una atención personalizada. Por todo ello desde el PCE mostramos el apoyo a las acciones emprendidas por el mantenimiento de los servicios bancarios iniciadas en comarcas como la de las Cuencas Mineras en Teruel.

Por último se añade los recortes en las líneas ferroviarias con la eterna excusa de ser deficitarias. Desde el PCE rechazamos el “acuerdo del trenicidio” perpetrado por el presidente de la DGA, Javier Lambán, y el exministro Ábalos, acordado en Madrid durante este verano y que implica cancelar definitivamente algunos de los trenes reclamados sustituyéndolos por autobuses y taxis a demanda.

El mundo rural aragonés parece tener la única función de ser ocupado por macroproyectos de instalaciones renovables con consecuencias irreversibles para la conservación de la biodiversidad y el paisaje en nuestro territorio. Proyectos que son controlados por el mismo oligopolio energético que está hinchado la factura de la luz y por lo tanto no tienen como objetivo el desarrollo del territorio ni las necesidades de la población; suponen una afectación enorme al territorio, la planificación territorial la llevan empresas privadas y no el Estado o las CCAA, se abusa de la declaración de utilidad pública, se expropian grandes extensiones de suelo agrícola, ganadero y forestal, no se crea empleo y no se favorece la generación a nivel local.

Por ello desde el PCE mostramos el apoyo a la movilización del próximo 16 de octubre en Madrid bajo el lema “renovables sí, pero no así” convocada por ALIENTE, la plataforma creada a principios de este año por más de 80 entidades y plataformas, entre ellas varias aragonesas, para proponer una transición energética justa.

La Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica (EARSE) se ha convertido en papel mojado, una estafa por los reiterados incumplimientos, ya que se siguen manteniendo las políticas anteriores en un intento de bloquear la crítica y de mantener el relato de un consenso que no existe. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Aragón y la EARSE son solo imagen que no modifican las políticas neoliberales y de externalización de lo público que se hacen en Aragón.

El Gobierno de Aragón compuesto mayoritariamente por formaciones que se reconocen de izquierdas está aplicando políticas neoliberales, lo que demuestra la falta de voluntad de las fuerzas que lo componen para revertir la situación y cumplir con sus

propios programas e idearios, pero también el margen de maniobra limitado de los gobiernos, que independientemente de quien los componga no se salen del trazado marcado por el desarrollo capitalista.

El próximo mes de noviembre celebraremos la XIII Asamblea de IU Aragón donde el PCE hemos trabajado por la unidad, manteniendo la dinámica emprendida desde la celebración de nuestra última asamblea. El reto fundamental que nos marcamos en esta asamblea es la consolidación de la alternativa social y de izquierdas que supone IU en Aragón, una alternativa con vocación de ampliar el espacio sobre las bases de un programa y un método.

Desgraciadamente no se ha avanzado mucho en esta línea desde el último Comité Regional, los contactos incipientes que mantuvimos con Podemos Aragón en la primavera de este año no han continuado. Esto no implica que no debemos redoblar esfuerzos en el impulso, todavía inicial, para la construcción del espacio de Unidas Podemos en Aragón tal y como aprobamos en nuestra Conferencia del PCE.

También nos encontramos a las puertas del lanzamiento de nuestro XXI Congreso del PCE, que se celebrará en un momento muy singular para nuestro Partido, no solo por la participación en el Gobierno de España, también por la reconfiguración de la izquierda alternativa en todo el país y por la situación de cambio de ciclo y social tras la pandemia de la Covid.

Nuestra apuesta al igual que en la asamblea de IU Aragón es por la unidad, pero con los cambios necesarios para que nuestro Partido no solo se adapte a esta nueva situación social y política, salga también a la ofensiva en la construcción de poder popular sobre el conflicto, para superar el régimen del 78 y construir el socialismo.

El XXI Congreso del PCE será la antesala para la celebración de nuestra Conferencia regional, que adaptará la política que emane del primero a nuestro territorio, pero que también pondrá fin al mandato de este Comité Regional. Sin prisa, pero sin pausa, comenzamos el diseño de la nueva dirección del Partido en Aragón con el cambio generacional necesario, donde los cuadros que pasen de la UJCE deberán jugar un papel central.

Zaragoza, 2 de octubre de 2021